

Movimientos sociales y estrategias de negociación política: ¿Qué pasa después de la protesta?.

Sindy Mora Solano.

Cita:

Sindy Mora Solano (2007). *Movimientos sociales y estrategias de negociación política: ¿Qué pasa después de la protesta?.* XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-066/1653>

Estrategias de negociación política en tiempos de crisis ¿Qué pasó después de la protesta?¹

Sindy Mora Solano*

Índice de contenidos

El estudio de la negociación política en la década de los 80.....	1
El desgaste en las negociaciones: la experiencia del sindicalismo bananero.....	4
Solidarismo y pentecostalismo: la religiosidad para neutralizar el conflicto.....	6
El incumplimiento de los acuerdos: la huelga de pagos del servicio eléctrico de 1983.....	10
Clientelismo, cooptación e institucionalización: la experiencia de los frentes de vivienda.....	11
La respuesta tecnocrática: la experiencia de las organizaciones campesinas.....	14
Abriendo preguntas: la negociación como problema de investigación.....	16
Bibliografía.....	19

El estudio de la negociación política en la década de los 80

La protesta social fue una de las respuestas a la crisis económica de principios de los años 80 que vivió la sociedad costarricense, en donde el aumento de los salarios, las medidas para paliar el alto costo de la vida y el desempleo, la solicitud de vivienda y la oposición a los recortes presupuestarios de instituciones públicas, en virtud de los compromisos adquiridos con organismos financieros internacionales, fueron las principales demandas expresadas por diversos actores sociales (CENAP₂: 1981, 18; CENAP₃: 1981, 14; CENAP: 1983, 15; Rovira: 1987, 43; Valverde et al: 1986, 4). Las respuestas que distintas administraciones dieron a estas demandas se caracterizaron por la “indiferencia” y el “incumplimiento de las promesas”, lo que a largo plazo sólo potenció el conflicto social (CENAP₂: 1981, 18).

La presente reflexión tiene como finalidad analizar las principales estrategias de negociación utilizadas después de la protesta social en los años 80, partiendo de que esta década constituyó un momento de explosión de la conflictividad social en Costa Rica, en un periodo de crisis en el que diversos actores sociales expresaron su disconformidad con las políticas económicas, pero también con las formas en las que se atendieron sus demandas. Al formar parte de una investigación que busca analizar las formas de negociación después de ciclos de acción colectiva, la presente reflexión busca situar los legados históricos que subyacen a las formas

* Socióloga. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

¹ Agradezco la colaboración del asistente Esteban Sánchez Solano, así como las sugerencias y comentarios que hiciera a este trabajo Ciska Raventós.

de negociación para atender, enfrentar, desmovilizar, neutralizar o institucionalizar el conflicto social².

¿Qué caracterizó a las negociaciones para atender el conflicto en la década de los años 80?, ¿qué formas adquirió la “indiferencia” y el “incumplimiento de promesas” en la negociación con diversos actores sociales?, y finalmente, ¿cuáles fueron las estrategias de negociación utilizadas en estas coyunturas conflictivas particulares? son las inquietudes de esta reflexión, centrando la atención en los principales conflictos de la Costa Rica de los 80, que fueron (1) las demandas del sindicalismo bananero, (2) las movilizaciones por el alza de servicios eléctricos, (3) la solución al problema de la vivienda y (4) las demandas de las organizaciones campesinas por el derecho a producir.

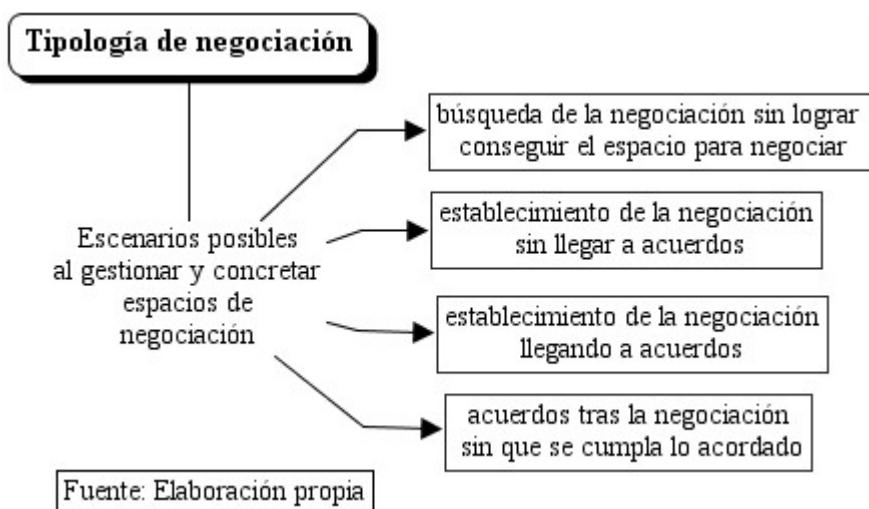
Sobre el término negociación, es importante señalar que en la América Central del periodo fue común su uso como sinónimo de diálogo. Con frecuencia, el vocablo negociación fue acuñado en la expresión “diálogo-negociación”, asumiendo que la negociación suponía el diálogo, en un contexto en el que éste recurso político fue necesario para darle una salida a los conflictos armados de la región³. En la mayor parte de la bibliografía en la que se recurrió al término negociación, ésta aparece como requisito indispensable para la consecución de la paz, por lo que negociación, diálogo y paz constituyen una trilogía en la cual adquiere significado el término, suponiendo además, la negociación como sinónimo de democratización (Álvarez: 1989, 128). Ya en el momento de la firma de Esquipulas II, “la idea de negociación política se enmarca en la emisión de decretos de amnistía, la concertación del cese de fuego dentro del marco constitucional, el diálogo con los grupos desarmados de la oposición política interna o bien con aquellos que se hayan acogido a la amnistía y la adopción de medidas para el desarme de las fuerzas irregulares que estén dispuestas a acogerse a ellas” (Barrera: 1989, 4),

² Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “Ciclos de acción colectiva y procesos de negociación política” inscrito en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, en donde se analizan los tres principales ciclos de acción colectiva de la Costa Rica de los últimos diez años. Estos ciclos tomaron forma debido (1) a la reforma del sistema de pensiones del Magisterio Nacional, realizada en 1995, (2) a la aprobación en el año 2000 de tres proyectos de ley conocidos como “Combo ICE”, que vendrían a regular la apertura en telecomunicaciones y energía y (3) a las protestas del 2004, contra el monopolio de la revisión técnica vehicular en manos del consorcio español Riteve.

³ Al respecto se pueden consultar los artículos “Proceso de diálogo-negociación entra en nueva etapa” del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP); “Centroamérica: Los caminos torcidos de la negociación” de Bayron Barrera; “El conflicto y la negociación en El Salvador” de Julio Carranza; “La dinámica del diálogo-negociación en Nicaragua y El Salvador a partir de Esquipulas II” de Gabriel Aguilera y “Entre la destrucción y la negociación. Gestiones y propuestas para la búsqueda de la paz” de Guillermo Galván, que entre otros textos, ilustran lo argumentado.

por lo que la negociación incluyó un camino jurídicamente resguardado para la consecución de la paz. Sólo en muy pocos documentos se dudó de la negociación como método para alcanzar la paz, considerándolo como una fórmula de institucionalización del conflicto, frente a una alternativa efectiva para encontrar “verdaderas” soluciones al mismo (Instituto Histórico Centroamericano: 1989, 2-3).

Pero si bien la negociación fue un instrumento para alcanzar la paz centroamericana, otra fue la finalidad cuando la negociación se utilizó como un instrumento para atender las demandas de actores colectivos organizados al interior de la sociedad costarricense. Esto muestra que para los años 80, el concepto de negociación evocó un significado distinto para una Costa Rica que carecía de un conflicto armado, pero que poseía diversos puntos de conflicto con diversos actores sociales. Frente a la multiplicidad de significados a los que evoca el término, en el presente documento entiendo por negociación los diversos mecanismos que proporcionan intercambios entre grupos sociales con intereses diversos y diferentes cuotas de poder, a fin de construir un acuerdo satisfactorio para ambos (Colomer: 2004, 527). En este sentido, varios escenarios pueden visualizarse en relación a la negociación después de una protesta que serían



Cómo propiciar un espacio para la negociación depende de una serie de factores entre los que se puede señalar la forma en que las demandas son simbólicamente presentadas por los líderes de una organización particular, así como de la disponibilidad de recursos para establecer alianzas y construir apoyos -ya sea ampliando los apoyos a nivel de base o a nivel gubernamental- (McCarthy et al: 1992, 276). De acuerdo a la distinción entre movimientos de consenso y movimientos de conflicto realizada por McCarthy y Wolfson, mientras que los

primeros tienden a diversificar las redes de apoyo y su articulación con las estructuras estatales para buscar la satisfacción de sus demandas, los segundos tienen mayores dificultades para construir un espectro organizativo de apoyo al planteamiento a sus demandas (McCarthy et al: 1992, 276).

El desgaste en las negociaciones: la experiencia del sindicalismo bananero

A finales de los años 70, las percepciones en cuanto a los alcances y posibilidades del sindicalismo para incidir políticamente eran favorables en relación a sus limitaciones para ver satisfechas sus demandas. El último estadio de la periodización sobre el movimiento obrero realizada por Manuel Araya en 1978, situó a los sindicatos en un nuevo momento de la participación política. Si bien entre 1948 y 1970 el sindicalismo había experimentado una etapa de reflujo, en donde a pesar del aumento en el número de sindicatos públicos éstos se encontraron mayoritariamente desmovilizados⁴, entre 1970 y 1978 el sindicalismo costarricense experimentó un reavivamiento, convirtiendo a los sindicatos en actores de suma importancia en la conflictividad social del momento (Araya: 1978, 26-28). El ánimo con que fue escrito el artículo de Araya dio cuenta de las expectativas de la época en cuanto a las potencialidades asociadas al sindicalismo, y en particular al sindicalismo bananero. Sin embargo, su auge a finales de los 70 se vio particularmente minado a principios del decenio siguiente.

La alta conflictividad de las zonas bananeras, en especial de Pococí, Guácimo, Siquirres y Matina, en la provincia de Limón -en donde se realizaron el 82% de las 73 huelgas registradas entre 1979 y 1982 (Zumbado: 1990, 111)-, fue expresión de las demandas de aumento de salarios, la firma y el cumplimiento de las convenciones colectivas, así como el respeto de las garantías sindicales (Aguilar: 1989, 132; Zumbado: 1990, 112). Sin embargo, su atención fue reducida debido a una serie de factores organizativos, empresariales y políticos como (1) la innovación tecnológica que aumentó la productividad, pero aumentó el desempleo, (2) los cambios en la política de contratación y (3) el fortalecimiento de la alianza existente entre los productores bananeros y el Estado, lo que evidenció la “actitud de apoyo estatal a las

⁴ Esta etapa de reflujo fue potenciada por varios factores como 1) la creación del Tribunal de Sanciones Inmediatas y el Tribunal de Provisión para juzgar “hechos delictivos” cometidos durante el conflicto armado de 1948, 2) la persecución, encarcelamiento o asesinato de los adeptos al Partido de izquierda Vanguardia Popular, el calderonismo y dirigentes sindicales, 3) la ilegalización del Partido Vanguardia Popular 4) y la disolución en 1949 de la Central de Trabajadores de Costa Rica (CTCR) (Aguilar: 1989, 71-73).

propuestas patronales y una indiferencia ante la política represiva y de despidos masivos practicada por las empresas bananeras” (Zumbado: 1990, 67-71).

De esta manera, y ante el recurso de la huelga, la estrategia de negociación de los empresarios conjugó la persecución, el despido de trabajadores sindicalizados y la elaboración de listas negras para impedir su recontractación, con un aumento significativo de la duración en las negociaciones para evitar construir acuerdos (Zumbado: 1990, 173). Debido a sus efectos desgastantes, la prolongación de las negociaciones obrero-patronales fue una de las estrategias fundamentales utilizadas para minar al sindicalismo bananero. En esta se puede distinguir la negociación por desgaste burocrático, que permitió extenuar a los trabajadores sindicalizados y a su organización, y la negociación por desgaste de demandas, lo que condicionó “en un mismo tiempo a estar reivindicando básicamente lo mismo y mediante las mismas formas de lucha” (Rivera: 1990, 95).

Fue a partir de 1982 cuando en la región Atlántica se empezó a observar la prolongación de las huelgas como un recurso de poder de los empresarios bananeros, estrategia que además tuvo como resultado la transformación de las demandas en el transcurso de la huelga, siendo éstas cada vez más acotadas. Ejemplifican lo anterior las principales 4 huelgas realizadas en las fincas de la Banana Development Company (BANDECO), como muestra el cuadro 1, para cuyas negociaciones fue indispensable aumentar el número de días en huelga, sin que esto fuera correlato del éxito. Valga señalar que en la huelga de 1982, los trabajadores no vieron satisfecha su demanda, cual fue el respeto de la convención colectiva, siendo a partir de ese año cuando primó una “actitud cada vez más represiva por parte de las empresas y el Estado especialmente durante los movimientos de lucha y la actitud intransigente en las negociaciones que hacían difícil el entendimiento” (Zumbado: 1990, 151).

Esta misma estrategia fue utilizada en la huelga del Pacífico Sur de 1984, protagonizada por los trabajadores de la Compañía Bananera de Costa Rica, afiliados a la Unión de Trabajadores de Golfito (UTG) y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT). Esta huelga tuvo una duración de 72 días, después de los cuales y en medio de actos represivos que acabaron con la vida de dos trabajadores (Donato et al: 1984; 12), la compañía bananera decidió “abandonar las plantaciones, con la justificación que la rehabilitación de los bananales deteriorados por la

larga huelga implicarían un costo muy elevado” (Zumbado: 1990, 129)⁵. La prolongación de la huelga de 1984, propiciando espacios de negociación que no se tradujeron a acuerdos, fue favorable a la Compañía debido a su interés de abandonar las plantaciones, eximiéndola de pagar salarios en un momento en el que había un descenso en la demanda internacional del banano. Posteriormente, tanto el fracaso de la huelga de 1982 en el Atlántico, como la de 1984 en el Pacífico Sur fueron ampliamente usadas por la propaganda solidarista, para incitar el abandono del sindicalismo, con lo que se inició el tránsito de formas de negociación colectivas -mediante el predominio de las convenciones colectivas-, hacia formas individualizadas de buscar el consenso, con la aparición del arreglo directo.

Cuadro 1

Aumento en la duración de las huelgas para conseguir acuerdos tras la negociación. Principales huelgas realizadas en las fincas de Banana Development Company (BANDECO). 1979-1982.		
Año	Duración	Número de trabajadores movilizados
1979	3 días	3600 trabajadores
1980	14 días	3600 trabajadores
1981	16 días	No se indica
1982	63 días	2500 trabajadores

Fuente: Elaboración a partir de Zumbado, 1990: 113-114

Solidarismo y pentecostalismo: la religiosidad para neutralizar el conflicto

El solidarismo fue la estrategia económica, política e ideológica introducida en Costa Rica a finales de la década del cuarenta por el Lic. Alberto Martén⁶, como una respuesta para mediar el conflicto obrero-patronal, y como una alternativa al desarrollo del sindicalismo, el movimiento popular y la influencia del Partido Vanguardia Popular (Blanco et al: 1982, 16-18). Basado en el temor a la “lucha de clases”, el solidarismo se constituyó en el mecanismo

⁵ Sólo tres años antes, en 1981, se relataron discursos triunfalistas en cuanto al poder de los trabajadores asociados a la UTG por la negociación de la quinta convención colectiva, discursos en los que se argumentaba que la huelga “hizo más fuerte a los bananeros” (CENAP₁, 1981: 25).

⁶ El Lic. Alberto Martén fue el principal ideólogo del solidarismo costarricense, quien participó en la Junta Fundadora de la Segunda República después del conflicto armado de 1948.

oficial de los empresarios para evitar una “revolución social violenta”, eventualmente amparada en la expansión del comunismo.

Las asociaciones solidaristas funcionaron principalmente en empresas grandes, capaces de aportar el 5% de la cesantía, porcentaje al que se adicionaba un 5% ahorrado por el trabajador, dinero con el que se financiaron diversos proyectos, como la compra de viviendas, electrodomésticos o instalaciones de canchas de fútbol, por ejemplo (Hernández: 1987, 14). Los beneficios materiales que proporcionó el solidarismo se hicieron acompañar de creencias, en las que el trabajador aparecía como co-propietario de la empresa, por lo cual evitar la confrontación obrero-patronal era una forma de cuidar la empresa que también le pertenecía al trabajador (Blanco et al: 1982, 310).

Si bien el solidarismo vivió momentos de declive, principalmente entre 1960 y 1970, éste experimentó un auge sin igual entre 1971 y 1981, auge que coincidió con la crisis económica de los 80 y por ende, con el aumento de la conflictividad social. Viéndose cuestionada la “paz social”, el solidarismo se instauró como una estrategia para calmar los ánimos ante las demandas sindicales, cuidándose “grandemente de no recurrir al desarrollo de mecanismos de represión física o legal para la clase trabajadora, cuando no han agotado las vías consensuales” (Blanco et al: 1982, 61).

A fin de evitar la confrontación obrero-patronal y sus consecuencias económicas y políticas, la Escuela Social Juan XXIII, instancia asociada a la Iglesia Católica y creada en 1963, jugó un papel muy importante en la construcción de negociaciones armoniosas vinculadas al solidarismo (Blanco et al: 1982, 62). La suya fue una función educativa, mediadora y organizadora de los conflictos obrero-patronales, labor realizada mediante la apertura en 1972 de talleres de capacitación en cursos sobre la Doctrina Social Cristiana, orientándose posteriormente a los valores del movimiento solidarista, instrucción que fue recibida por al menos 4181 trabajadores agrícolas y manufactureros entre 1976 y 1981 (Blanco et al: 1982, 174). Según el principal representante del órgano eclesiástico, el Pbro Claudio Solano, en estas capacitaciones “los trabajadores estudian derecho laboral, relaciones humanas y aprenden a reclamar sus derechos y cumplir con sus deberes en un marco estrictamente cristiano” (Solano, citado en Blanco et al: 1982, 178).

Su influencia en el sindicalismo bananero fue determinante, ya que según su director el “solidarismo es el único movimiento que desplazó a los sindicatos comunistas en la zona

bananera” (Blanco: 1987, 14), logrando la desmovilización de los trabajadores, así como negociaciones individuales y armoniosas. Esta negociación, que anteriormente tuvo carácter colectivo, dio paso a una nueva forma de construir el consenso, que fue el arreglo directo y que vino a sustituir a las convenciones colectivas. El arreglo directo se convirtió en “un arreglo administrativo entre patronos y trabajadores”, desprovisto del carácter de ley y del respaldo sindical que tuvieron las convenciones colectivas, por lo que el control empresarial resultó más sencillo (Zumbado: 1990, 214). Sólo para citar un ejemplo de este rápido tránsito del arreglo colectivo al arreglo privado, para 1981 se firmaron un total de 22 convenciones colectivas en las zonas bananeras, mientras que sólo 4 fueron firmadas en 1982 (Rivera: 1990, 114).

Por su parte, el pentecostalismo -movimiento religioso que nació en Estados Unidos a principios del siglo XX destinado a atender las necesidades de migrantes y sectores empobrecidos (Rojas: 1989, 95)-, de creciente influencia en la zona Atlántica costarricense entre el 70 y el 80, consideró las acciones de protesta como sinónimo de “enfrentamientos” que alteraban la paz social y enemistaban innecesariamente a los creyentes en un mismo Dios. Debido a su énfasis conversionista, los pentecostales fueron impulsados a la evangelización y el proselitismo, proceso vivido con gran auge en las zonas de Pococí, Siquirres, Guácimo y Limón, como lo muestra el cuadro 2.

Su aparición coincidió con la duda de que el sindicato era un espacio seguro para la consecución y satisfacción de las demandas, dado que las nuevas formas de negociación practicadas con este actor, hicieron del sindicato y la huelga espacios de riesgo, dejando de asegurar la estabilidad laboral, y garantizando por el contrario, la pérdida del trabajo y en condiciones extremas, la represión física (Rojas: 1989, 51). Así, uno de los principales resultados del pentecostalismo fue la neutralización del conflicto como apuesta a la búsqueda la paz, sin tener que pasar por el intercambio en la negociación. Al respecto, un sindicalista convertido al pentecostalismo entrevistado en 1989 señaló: “No hay incertidumbre por lo que pasará mañana, que pasará este mes, que pasará el otro año; si habrá un gobierno peor o mejor, no hay incertidumbre por esas cosas, hay seguridad, uno está firme, hay una paz que sostiene que uno sabe que es la paz de Dios” (Rojas: 1989, 130).

Cuadro 2

Crecimiento numérico de las iglesias Protestantes Pentecostales y No Pentecostales en la provincia de Limón, en los cantones de Pococí, Siquirres, Guácimo y Limón en 1974, 1978, 1983 y 1986.								
Año	1974		1978		1983		1986	
Tipo de Iglesia	P*	NP**	P	NP	P	NP	P	NP
Pococí	8	3	10	7	21	12	52	11
Siquirres	10	6	15	8	19	9	39	10
Guácimo			7	5	7	5	17	7
Limón	43	29	66	51	105	54	184	53

Fuente: Rojas, 1989: 100. Elaboración a partir de INDELA Directorio de iglesias, organizaciones, ministerios del movimiento protestante; Costa Rica.

1974, 1978, 1983, 1986. San José, Costa Rica.

* P: Pentecostales

** NP: No pentecostales

Sin lugar a dudas, las formas de la negociación con los sindicatos bananeros fueron diferentes a las practicadas con los llamados sindicatos democráticos. Mientras que los sindicatos democráticos sostuvieron que “para enfrentar la situación de crisis que vive el país, patronos y trabajadores y Gobierno deben unir sus fuerzas”, los sindicatos clasistas “sostienen que es en este tipo de situaciones en que se hace recaer sobre los trabajadores el mayor peso de la crisis”, por lo que sus estrategias de lucha son más radicales (Valverde et al, 1992: 4). Como señalaron Valverde y Trejos, la estrategia gubernamental residió en establecer relaciones de carácter clientelista con los sindicatos democráticos, frente a la persecución y represión de los sindicatos de izquierda (Valverde y Trejos: 1996, 7). Esta diferenciación entre sindicatos de clase y sindicatos democráticos posibilitó “el establecimiento de un orden preferencial de negociación, que privilegia las conversaciones entre el Gobierno y los llamados sindicatos democráticos, ignorando a los demás, [...lo cual...] no ha sido más que una maniobra para mantener la división entre las organizaciones y no un mecanismo real de negociación” (CEPAS: 1982, 4).

El incumplimiento de los acuerdos: la huelga de pagos del servicio eléctrico de 1983

La crisis de principios de los 80 afectó significativamente a los sectores populares debido al recorte del presupuesto de las instituciones públicas y al aumento de los servicios públicos llevados a cabo por la Administración Monge Álvarez (1982-1986) (Alvarenga: 2005, 219). Fue en este contexto en el que se realizaron, desde finales de abril hasta el 10 de junio de 1983, una serie de manifestaciones de protesta que culminaron con la huelga de pagos de recibos de electricidad, en donde los grupos organizados de vecinos dejaron de pagar sus recibos de luz.

Esta protesta inició debido a que el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) aprobó un aumento en el servicio del 11% que empezó a cobrarse en abril de 1982, acompañado de un aumento escalonado del 70% que rigió desde noviembre de 1982 hasta abril de 1983 (Alvarenga: 2005, 222). Después de varias marchas y concentraciones, el 2 de mayo de 1983 se decretó la huelga de pagos, que si bien inició como una respuesta planteada por la Asociación de Desarrollo de Hatillo, pronto se convirtió en una protesta de carácter nacional.

En este periodo se pueden identificar dos negociaciones a fin de darle una solución al conflicto. La primera de ellas se realizó a inicios de mayo de 1983, en donde el gobierno entró en negociaciones con la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD), confederación sindical asociada al Partido Liberación Nacional (PLN), con la cual se acordó una reducción de las tarifas que fue considerada risible por las asociaciones de vecinos. Este intento de institucionalizar el conflicto mediante una negociación con una organización cercana al PLN fue una negociación fallida debido a que el resto de organizaciones involucradas en el movimiento, pronto desconocieron las negociaciones, así como plantearon la necesidad de revisar los sistemas de lectura de consumo de electricidad y el costo del servicio (Alvarenga: 2005, 225). Fue por ello que esta negociación, lejos de aminorar el conflicto, potenció las protestas que se extendieron desde los barrios del sur de la capital San José, hasta diversas provincias como Heredia, Limón y Puntarenas.

El 9 de junio de 1982, el gobierno convocó a una nueva negociación debido a los bloqueos masivos que se vivieron en todo el territorio nacional. En esta ocasión, si bien el gobierno aceptó la demanda de reducción de las tarifas eléctricas, desatendió otra serie de demandas planteadas, como lo fue la propuesta legislativa del Partido Vanguardia Popular (PVP) de que las tarifas eléctricas fueran competencia de la Asamblea Legislativa. Dos semanas después de

esta negociación, los dirigentes del movimiento denunciaron el incumplimiento de los acuerdos, dado que no se redujo el monto de las tarifas eléctricas, diversas instancias se negaron a otorgar un año para el pago de los recibos de la luz atrasados y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no había hecho entrega de las tarjetas de consumo de electricidad a sus abonados (Alvarenga: 2005, 256-257).

Esta experiencia demuestra como una vez que se logró la negociación y se depusieron las diversas acciones colectivas de protesta, los grupos sociales anteriormente movilizados tuvieron pocos instrumentos para vigilar el cumplimiento de los acuerdos. En esto incidió la imposibilidad de que las Asociaciones de Desarrollo y diversos grupos de vecinos desarrollaran un mayor nivel de organicidad y articulación en su actuar político, a fin de observar el cumplimiento de las demandas (Valverde et al: 1993, 11). El incumplimiento de lo acordado se evidenció en la estrategia de la Administración Monge Álvarez, de realizar una serie de aumentos paulatinos y de pequeña escala al servicio eléctrico, sin que la oposición de los grupos movilizados se hiciera presente. Así “por un lado se llegaba a un acuerdo con los dirigentes de los movimientos de protesta con el fin de superar la tensión social, por la vía de la desmovilización de las organizaciones populares y, por otro lado, una vez apaciguado el conflicto, el gobierno ejecutaba las decisiones y medidas de política económica que habían generado las protestas” (Valverde et al: 1993, 12).

Clientelismo, cooptación e institucionalización: la experiencia de los frentes de vivienda

Si bien las Administraciones de Rodrigo Carazo (1978-1982) y Luis Alberto Monge (1982-1986) ensayaron el desgaste en las negociaciones para no llegar a acuerdos como el principal mecanismo para enfrentar la protesta social, otra fue la estrategia a la que recurrió la Administración Arias Sánchez (1986-1990). Con el Partido Vanguardia Popular disuelto y un sindicalismo reducido a su mínima expresión, Oscar Arias Sánchez⁷ tuvo que hacerle frente a los grupos organizados de lucha por una vivienda digna, alrededor de cuyas demandas se agruparon distintos sectores que dieron origen a los frentes de vivienda⁸. De esta forma, en 1980 surgió la Coordinadora Nacional de Lucha por la Vivienda Digna, asociada al Comité

⁷ Oscar Arias Sánchez fue Presidente de la República en el periodo 1986-1990, habiendo sido reelecto para el periodo 2006-2010, por lo que es el actual Presidente de Costa Rica.

⁸ Aunque habría que señalar que el problema de lucha por la vivienda es de más larga data, como lo muestra el texto de Manuel Argüello, titulado “Los más pobres en lucha”.

Patriótico Nacional (COPAN), en 1981 el Frente Democrático de la Vivienda (FDV), asociado al Partido Liberación Nacional (PLN) y en 1984 el Frente Costarricense de la Vivienda (FCV), producto de la división interna del FDV, por lo que también se asoció al PLN (Molina: 1990, 6). Con el surgimiento de los frentes de vivienda se dio un cambio de estrategias en los procesos de negociación, pasando de un “enfrentamiento de las organizaciones con el Estado a una negociación y coordinación entre ambas” (Molina: 1990, 8), lo que dio origen a una nueva relación definida por el clientelismo.

Justamente en el periodo 1982-1984, las respuestas estatales a la protesta de los frentes se caracterizaron por su timidez, la represión y el control del movimiento, así como por la competencia de los frentes de vivienda por acceder a las eventuales soluciones gubernamentales (Molina: 1990, 47). Fue así como surgió el FDV, dirigido por Guido Granados, diputado y miembro del PLN quien buscó la canalización de las demandas al interior del partido, evitando así, la expansión de COPAN. A principios de los años 80, la respuesta gubernamental a la protesta se caracterizó por la ausencia de diálogo, como lo muestra la relación que distintas administraciones establecieron con las organizaciones barriales, en donde el “elemento característico en todas ellas lo constituyó la falta de diálogo por parte del gobierno con los demandantes y el frecuente recurso a la represión y los desalojos” (Valverde et al: 1992, 5; CENAP: 1981, 19).

Sin embargo, a finales de 1985 -en campaña electoral para las elecciones nacionales de 1986- se realizó en el Balcón Verde una reunión entre los frentes de vivienda y Oscar Arias, entonces candidato del PLN, quien se comprometió a otorgar del dinero de su campaña, 20 millones de colones en materiales para la construcción de viviendas, a cambio del respaldo electoral de los frentes (Molina: 1990, 71). Ante la negativa de la Procuraduría General de la República a gastar el dinero de la campaña electoral en fines no prescritos para ello, en enero de 1986 Arias recurrió a los empresarios asociados al PLN, con quienes logró hacer la entrega de materiales de construcción para los frentes de vivienda, a cambio del apoyo electoral que contribuyó a su triunfo en las elecciones de 1986.

Una vez ganadas las elecciones fueron diversas las invasiones de propiedad realizadas por los frentes, lo que intensificó la presión social por la vivienda, efecto directo del establecimiento de relaciones clientelistas. Los frentes liberacionistas, rivales políticos entre si, se lanzaron a la invasión de terrenos con la finalidad de asegurarse un lugar en los proyectos prometidos por la

Administración Arias, que carecía de la certeza de poder llevarlos a buen fin⁹. Esto llevó a los líderes de los frentes a firmar un acuerdo con el gobierno, para darle tiempo a la Administración de encontrar una salida al problema de la vivienda, lo que representó una continuación de la relación establecida en campaña electoral (Molina: 1990, 82).

Es por ello que en la Administración Arias Sánchez la negociación asumió la forma de control, recurriéndose a los siguientes mecanismos: (1) preadjudicación de viviendas como forma de control electoral, en donde el 76% de 2558 preadjudicaciones fueron hechas a grupos pertenecientes a los frentes, (2) incorporación de líderes en los programas de vivienda, quienes se encargaron del diagnóstico e identificación de asentamientos, ya fuera a través de la contratación de dirigentes -caso del FDV- o la adjudicación y financiamiento de proyectos a cargo de los dirigentes -caso de COPAN-, (3) coordinación y supervisión de los frentes, mediante la cual se logró contener la conflictividad social, mantuvo a los dirigentes ocupados y se aprovechó de la experiencia aportada por ellos, (4) institucionalización de la confusión organizacional en cuanto a la rendición de cuentas, dada la dificultad de identificar quienes eran funcionarios estatales o miembros de los frentes, lo que potenció las rivalidades y la negociación separada de sus integrantes, (5) y finalmente, las reuniones adquirieron un carácter técnico, dado que las organizaciones terminaron trabajando para los representantes estatales (Molina: 1990, 99-108). “De allí en adelante se puede decir que el relativo enfrentamiento que desarrolló con el Estado desaparece para dar paso a una relación distinta, en la que aún la invasión (que es en sí misma una impugnación a la propiedad) juega un papel de cálculo político clientelístico” (Molina: 1990, 56).

De esta forma, mientras las respuestas dadas al sindicalismo bananero conjuraron el desgaste en las negociaciones, con las formas individualizadas de la negociación, la atención de las demandas y la institucionalización del conflicto fueron las prácticas negociadoras utilizadas con los frentes de vivienda.

⁹ Como señala Molina, el proyecto de las 80000 mil soluciones de vivienda, difundido como promesa de campaña electoral, fue una promesa que carecía de todo sustento económico, lo que se evidenció en los dos primeros años de la Administración Arias Sánchez (Molina: 1990, 19). Sobre el escepticismo de la época en cuanto a las posibilidades de cumplir con dicha promesa se pueden consultar los artículos “80 mil viviendas para quien?” de José Manuel Valverde y Silvia Lara y “Vivienda digna o tugurio institucional” de CENAP.

La respuesta tecnocrática: la experiencia de las organizaciones campesinas

La década de los 80 encontró al país sumido en una profunda crisis económica, que fue acompañada de un proceso de ajuste estructural que complicó el escenario de la conflictividad social, debido al incremento en las luchas por la mejora y el mantenimiento de las condiciones de vida y por la oposición a la reforma del Estado costarricense (Valverde et al: 1992, 1).

El proceso de aprobación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) estuvo caracterizado por un alto tecnocratismo, cuyas negociaciones fueron protagonizadas por un “equipo económico” conformado por un grupo de jefes de las instituciones económicas centralizadas. Este equipo, nombrado discrecionalmente por el Presidente de la República, conformó una institucionalidad altamente informal que funcionó como intermediaria entre el gobierno y los organismos financieros internacionales, lo que potenció el establecimiento de negociaciones de carácter no público y con un alto distanciamiento en relación a la ciudadanía (Raventós: 1997, 117-118).

En este contexto, la negociación de la cuestión agraria se convirtió en una de las grandes dificultades de las administraciones del momento, pero en particular de la Administración Arias Sánchez, a cuyo presidente “se le dificultó mucho más enfrentar el problema agrario que resolver los conflictos militares en el resto de Centroamérica, por lo cual obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1987” (Edelman: 2005, 188). Esto, porque su gobierno tuvo mayores márgenes para manifestar su oposición a la guerra contra la Nicaragua Sandinista, pero no para oponerse a las políticas neoliberales de Washington, lo que le llevó a aceptar sus recomendaciones en política económica (Edelman: 2005, 189). Mientras las principales demandas del sector campesino costarricense fueron la lucha por la tierra, la defensa de la producción tradicional, la participación en nuevos espacios productivos y el fortalecimiento de su autonomía organizativa (Román: 1993, 100-102), la estrategia del gobierno se encontró anclada en los Programas de Ajuste Estructural (PAE) que potenciaron el conflicto con las organizaciones campesinas.

Las dificultades que existieron entre el gobierno y las organizaciones campesinas, especialmente en la Administración Arias Sánchez, se hicieron evidentes ante la presencia de tres ministros de Agricultura, quienes fueron Alberto Esquivel Volio, Antonio Álvarez Desanti y José María Figueres Olsen. En el contexto de la aprobación de los PAEs, estos ministros conjugaron una diversidad de mecanismos para relacionarse con el sector agrario como lo

fueron el ocultamiento de información, la intransigencia para negociar y una discursividad tecnocrática, dejando excluidas de las negociaciones a las organizaciones campesinas (Edelman: 2005, 189).

Sólo para citar un ejemplo, en 1987 las organizaciones campesinas enviaron una carta al presidente de la república, en donde “llamaron la atención sobre el trato y la forma de actuar del Ministro Álvarez Desanti. Se quejaban de que el Ministro se había referido “a los dirigentes campesinos en términos ofensivos. Textualmente ha llamado 'tontos, ingenuos' a los dirigentes y todo su estilo ha sido absolutamente irrespetuoso, ofensivo y prepotente”” (Edelman: 2005, 191). Un año después, el desencuentro entre campesinos y el ministro fue mayor, ya que en la reunión organizada para entablar conversaciones con Álvarez Desanti, éste llegó cuatro horas tarde a la cita, razón por la cual, los agricultores se negaron a dialogar con él (Edelman: 2005, 197). Algo similar ocurrió en la huelga de Santa Cruz de 1988, en donde después de marchas, bloqueos y la actuación de la Fuerza Pública, los dirigentes de la Asociación de Pequeños Productores del Pacífico Seco (ASPPAS) levantaron las medidas de presión, bajo la promesa de una negociación que se realizaría en San José. Sin embargo, al llegar a la capital ningún funcionario público esperaba a los representantes campesinos (Edelman: 1991, 166).

Sin que existiera un patrón básico para enfrentar a las organizaciones campesinas, en términos generales, se puede decir que el gobierno “desarrolló un modelo de negociación en el que combinó la represión, el diálogo, la atención selectiva de una demanda y la desatención total de otras” (Román: 1993, 120). En este estilo de negociación, el criterio tecnocrático fue fundamental para la toma de decisiones que suponían la exclusión de los representantes campesinos. Edelman agregó a propósito de este recetario de la negociación con los campesinos, “las concesiones menores, promesas vagas y un uso repentino –aunque por lo general, esporádico y moderado- de la represión” (Edelman: 1991, 177).

Al analizar las negociaciones con la Federación Sindical Agraria Nacional (FESIAN), la Unión de Pequeños y Medianos Productores Nacionales (UPANACIONAL) y la Unión de Pequeños Agricultores del Atlántico (UPAGRA), Román encontró diferencias significativas en los estilos de negociación. Mientras que con la FESIAN el gobierno desarrolló un estilo clientelista, debido a la vinculación y relaciones cercanas de sus integrantes con el PLN, con los representantes de UPANACIONAL desarrolló una estrategia legalista, en quienes primó la

idea de sugerir procedimientos legales para alcanzar determinadas metas¹⁰. Por su parte, con UPAGRA se construyó una relación de constante conflicto, debido a los instrumentos de lucha utilizados –bloqueos, marchas y toma de edificios-, a la presencia de un número significativo de extrabajadores bananeros en la organización y al apoyo que UPAGRA tuvo de parte del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT), organización vinculada a la izquierda (Román: 1993, 162-187).

Así como las medidas de presión fueron un elemento indispensable, sin el cual el gobierno no hubiera accedido a la negociación, un aspecto común a las tres negociaciones analizadas por Román fue la demora y la prolongación para desgastar a las organizaciones y a sus representantes, sin que se consiguiera acuerdo alguno después de la negociación. Como lo señaló un representante de FESIAN, la lentitud en las negociaciones tenía como motivación el “provocar nuestro cansancio, ellos hacían toda clase de artimañas para alargar la negociación” (Ramos, citado en Román: 1993, 179).

Abriendo preguntas: la negociación como problema de investigación

Al analizar las formas de negociación se ha buscado responder al interrogante de cómo atendió, enfrentó y negoció sus conflictos la sociedad costarricense en la década de los años 80. Una forma de negociar fue la practicada con los representantes del sindicalismo bananero, en donde la demora en las negociaciones, la neutralización del conflicto mediante la inserción del solidarismo y el arreglo directo se impusieron sobre las formas colectivas de construir arreglos. Las negociaciones para atender las demandas relacionadas con el aumento de las tarifas eléctricas, cuyos acuerdos no se cumplieron fue la estrategia utilizada con las Asociaciones de Desarrollo y los grupos de consumidores. La estrategia utilizada con los frentes de vivienda, compuesta de cooptación, clientelismo e institucionalización del conflicto dio sus frutos con la llegada al poder de Oscar Arias Sánchez en 1986, quien ensayó una nueva forma de construir el consenso, intercambiando apoyo electoral por soluciones de vivienda. Con las organizaciones campesinas, la intransigencia, las relaciones tecnocráticas y las

¹⁰ Al ser Cartago una de las provincias más conservadoras y devotas al catolicismo, los representantes gubernamentales tenían más disposición a negociar con los miembros de UPANACIONAL, lo que no sucedió con las organizaciones campesinas más militantes (Edelman, 2005: 173).

negociaciones desgastantes fueron los mecanismos a los que se recurrió en la mesa de negociaciones.

Siguiendo a McCarthy y Wolfson, en las negociaciones tuvieron más posibilidades de concretar acuerdos quienes construyeron más apoyos, vinculándose a las redes del Partido Liberación Nacional (PLN), quienes además, plantearon sus demandas desde una vía más institucionalizada, sin recurrir “en exceso” a la utilización de mecanismos de presión considerados “violentos”. Sin lugar a dudas, esta se convirtió en una de las contradicciones fundamentales de los procesos de negociación de la década, ya que a pesar de la preferencia por la vía institucionalizada, fue imposible llamar la atención de los representantes gubernamentales, sin recurrir a los mecanismos de presión.

Ahora bien, el análisis de los principales conflictos de la década permite concluir que la participación en las negociaciones no siempre fue un paso previo en el camino de la atención a la demanda. Como mostraron las experiencias del sindicalismo bananero, de los grupos opuestos al aumento de las tarifas eléctricas y de las organizaciones campesinas, no siempre la negociación tuvo como resultado la solución de las demandas planteadas, esto porque el objetivo del negociar no fue la atención de las mismas. La desmovilización, la neutralización o la institucionalización del conflicto fueron algunos de los resultados de estas dinámicas políticas.

Así, valorando las formas de negociación, el carácter clientelista fue el que ofreció mayores posibilidades de alcanzar las reivindicaciones, aunque esto significara la desmovilización de los grupos sociales. Observando la negociación desde las respuestas del gobierno y el cumplimiento de las demandas, si bien las negociaciones de carácter clientelista permitieron el establecimiento de relaciones más cercanas entre los representantes de las organizaciones y los representantes gubernamentales -que caso de los Frentes de vivienda y de FESIAN-, a largo plazo estas organizaciones se vieron minadas, debido a la fragilidad de los compromisos políticos adquiridos con organizaciones más poderosas, lo que les restó autonomía y capacidad de proposición, llevándolas a aceptar los arreglos convenientes al PLN. De la misma forma, esto se tradujo en la pérdida de contacto con las bases y por lo tanto, en una reducida capacidad de afiliación, una vez que el movimiento fue institucionalizado (Román: 1993, 266).

En este proceso, las diversas administraciones de la década fueron desarrollando nuevas estrategias políticas para enfrentar el conflicto. De esta forma, si bien la Administración Arias Sánchez fue heredera de una serie de conflictos que no resolvieron los gobiernos precedentes, su actuar mostró un cambio de tácticas en cuanto a la búsqueda de nuevas formas de relacionamiento con los actores políticos, convirtiendo a sus adversarios en sus colaboradores y por ende, aminorando el conflicto, lo que fue particularmente cierto para los frentes de vivienda.

En el caso de las demandas de las organizaciones campesinas, los condicionamientos internacionales y el contexto de aprobación de los PAEs influyeron en la incapacidad estatal para responder sus demandas. Si bien las organizaciones campesinas establecieron acuerdos con los Ministros de Agricultura y Ganadería, muchos de estos funcionarios firmaron compromisos que la mayor parte de las veces no podían cumplir (Edelman: 2005, 193).

Finalmente, a diferencia de lo planteado en el contexto de los conflictos armados centroamericanos, en donde el término negociación fue acuñado en el binomio “diálogo-negociación”, esta reflexión muestra la diversidad de prácticas de negociación que mediaron dicho concepto para el contexto costarricense. De la misma manera, esta reflexión muestra como la negociación se opuso al diálogo para construir alternativas a los conflictos sociales de los años 80, visualizando un miedo a la confrontación y al desencuentro, que fue atendido con representaciones de la negociación.

Ante las medidas de presión se respondió con represión, con negociaciones desgastantes por la vía burocrática o por la vía del agotamiento de las demandas y con acuerdos que no se cumplieron. El diálogo no fue necesario cuando se recurrió al solidarismo o se potenció la presencia del pentecostalismo para la construcción de una “paz social”, por lo que el negociar costarricense operó canalizando el conflicto, desmovilizando y desgastando a las organizaciones en el proceso de negociación. Sin lugar a dudas, esto abre preguntas en relación a las potencialidades de los actores políticos del país para apropiarse del espacio político que cuestionan, pero con el que tienen pocas relaciones para exigir el cumplimiento de acuerdos y la rendición de cuentas.

Considerando lo anterior, es importante plantear algunas preguntas en función de nuevas reflexiones: ¿es posible encontrar estas estrategias de negociación en nuevas coyunturas de conflictividad social?, ¿qué del miedo a “la lucha de clases”, o del miedo a una solución

violenta de los conflictos ha operado en las formas de negociación, no sólo en la década de los 80, sino en las dinámicas políticas de los años siguientes?, ¿cómo ha interferido la idea de la “paz social” del solidarismo y el miedo a la solución violenta en la solución de los conflictos en nuevos ciclos de acción colectiva?, y finalmente, ¿ha sido el miedo a la confrontación lo que impide la constitución de mecanismos efectivos de la negociación?

Bibliografía

- Aguilera, Gabriel: 1989 “La dinámica del diálogo-negociación en Nicaragua y El Salvador a partir de Esquipulas II”. En: Relaciones Internacionales, N° 27.
- Alvarenga, Patricia: 2005 De vecinos a ciudadanos. Movimientos comunales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica. San Pedro, Editorial de la Universidad de Costa Rica y Editorial de la Universidad Nacional.
- Álvarez, Alberto: 1989 “La democratización en Centroamérica”. En: Cuadernos de Nuestra América, volumen VI, N° 13.
- Argüello, Manuel: 1981 Los más pobres en lucha. Heredia, Editorial de la Universidad Nacional.
- Bayron, Barrera: 1989 “Centroamérica: Los caminos torcidos de la negociación”. En ACEN-SIAG Agencia Centroamericana de Noticias, N° 139.
- Blanco, Gustavo y Navarro, Orlando: 1982 “El movimiento solidarista costarricense y la nueva estrategia de intervención de la burguesía en el movimiento laboral costarricense”, Tesis presentada para optar por el grado de Licenciatura en Sociología. San Pedro, Universidad de Costa Rica.
- Blanco, Gustavo: 1986 “El solidarismo y los padrinos poderosos”. En: Aportes, Año 6, N° 30-31.
- Blanco, Gustavo: 1987 “El dilema de la Iglesia ¿Solidarismo o Sindicalismo?”. En: Aportes, Año 7, N° 39.
- Carranza, Julio: 1990 “El conflicto y la negociación en El Salvador”. En: Cuadernos de Nuestra América, volumen VII, N° 14.
- CENAP 1: “U.T.G: 1981 “La huelga hizo más fuerte a los bananeros”?”. En: Aportes, Año 1, N° 4.

- CENAP 2: 1981 “Crisis enfilea a los trabajadores hacia una lucha que empieza con la protesta popular generalizada”. En: Aportes, Año 1, N° 5.
- CENAP 3: 1981 “La crisis frente a los trabajadores. El tigre suelto y el burro amarrado”. En: Aportes, Año 1, N° 6.
- CENAP: 1983 “Vivienda digna o tugurio institucional”. En: Aportes, Año 3, N° 14-15.
- CEPAS: 1982 “Las medidas de empobrecimiento originan la protesta popular”. En: Aportes, Año 2, N° 10.
- Colomer, Joseph María: 2004 “Negociación”, En Giner, Salvador; Lamo de Espinosa, Emilio; Torres, Cristóbal (editores), Diccionario de Sociología. Madrid, Alianza Editorial.
- Donato, Elisa; Rojas, Manuel: 1984 “La huelga bananera. Un punto bajo del sindicalismo”. En: Aportes, Año 4, N° 22.
- Edelman, Marc: 1991 “La cultura política de una protesta campesina contra el ajuste estructural económico”. En: Revista de Historia, N° 23, enero-junio.
- Edelman, Marc: 2005 Campesinos contra la globalización. Movimientos sociales rurales en Costa Rica. San Pedro, Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Galván, Guillermo: 1989 “Entre la destrucción y la negociación. Gestiones y propuestas para la búsqueda de la paz”. En: Relaciones Internacionales, N° 29.
- Hernández, Gabriela: 1987 “Bananeros denuncian arreglos directos con la Standard”. En: Aportes, Año 7, N° 37.
- Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP): 1991 “Proceso de diálogo-negociación entra en nueva etapa”. En: Panorama Centroamericano - Reporte Político, N° 56.
- Instituto Histórico Centroamericano (IHCA): 1989 “Nuevo impulso. Hacia las negociaciones”. En: Envío, Año 8, número 92.
- McCarthy, John; Wolfson, Mark: 1992 “Consensus Movement, Conflict Movements and Cooptation of Civil and State Infrastructures”. En: Morris Aldon; McClurg Mueller, Carol (editores), Frontiers in Social Movement Theory. Yale University, Yale University Press.
- Molina, Eugenia: 1990 “Repercusiones político-organizativas del acuerdo político firmado entre los frentes de vivienda y el Estado durante la administración Arias Sánchez”,

- Tesis presentada para optar por el grado de Magíster Scientiae en Sociología. San Pedro, Universidad de Costa Rica.
- Raventós, Ciska: 1997 “De la imposición de los organismos internacionales al “ajuste a la tica”. Nacionalización de las políticas de ajuste en Costa Rica en la década de los años ochenta”. En: Revista de Ciencias Sociales, N° 76.
- Rivera, Rolando: 1990 “El exobrero bananero en las organizaciones campesinas de la Región Atlántica de Costa Rica”, Tesis presentada para optar por el grado de Licenciatura en Sociología. San Pedro, Universidad de Costa Rica.
- Rojas, Jorge Alberto: 1989 “La Vigencia del Mensaje Pentecostal en la Zona Atlántica Costarricense”, Tesis presentada para optar por el grado de Licenciatura en Sociología. San Pedro, Universidad de Costa Rica.
- Rojas, Manuel: 1978 “El desarrollo del movimiento obrero en Costa Rica: un intento de periodización”. En: Revista de Ciencias Sociales, N° 15 - 16.
- Román, Isabel: 1993 “Estilos de negociación política de las organizaciones campesinas en Costa Rica durante la década de los ochentas”, Tesis presentada para optar por el grado de Magíster Scientiae en Sociología. San Pedro, Universidad de Costa Rica.
- Rovira, Jorge: 1987 Costa Rica en los años 80. San José, Editorial Porvenir.
- Valverde, José Manuel y Silvia Lara: 1986 “80 mil viviendas para quien?”. En: Aportes, Año 5, N° 28.
- Valverde, José Manuel, Boris, Jean Pierre y Cristina, Araya: 1992 “Política económica, movimientos sociales y política social: 1980-1988”. En: Contribuciones, N° 14.
- Valverde, José Manuel; Trejos, María Eugenia: 1993 “Diez años de luchas urbanas en Costa Rica (1982-1992)”. En: Revista de Ciencias Sociales, N° 61.
- Valverde, José Manuel; Trejos, María Eugenia: 1996 “El movimiento sindical ante el proceso de ajuste estructural”. En: Aportes, Año 4, N° 22.
- Zumbado, Iriabel: 1990 “Algunos condicionantes de la crisis del Movimiento Sindical Bananero en la Región Atlántica Costarricense: Pococí, Guácimo, Siquirres y Matina. (1981-1986)”, Tesis presentada para optar por el grado de Licenciatura en Sociología. San Pedro, Universidad de Costa Rica.